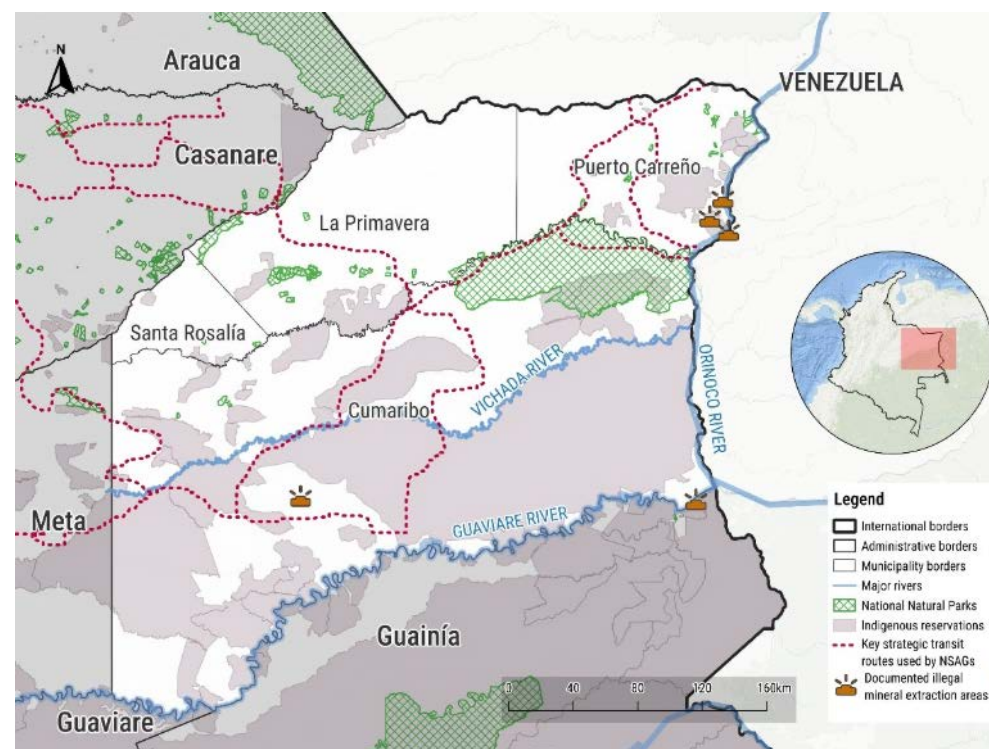


Deterioro de la situación humanitaria en Vichada: impactos anticipados para 2026

HALLAZGOS CLAVE

- Tras el colapso del pacto de no agresión entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia (SM) en Vichada en agosto de 2025, estalló una disputa territorial entre los grupos, incrementando los riesgos de protección, incluyendo el desplazamiento y las restricciones a la movilidad. El impacto ha sido más severo para las comunidades ribereñas y fronterizas a lo largo de la frontera con Venezuela.
- Las elecciones de 2026 plantean altos riesgos de coerción armada. Cumaribo permanece en 'riesgo extremo' de violencia entre múltiples Grupos Armados No Estatales (GANE), generando una alta incertidumbre territorial. Como en periodos electorales anteriores, esta clasificación evidencia un entorno volátil que facilita la cooptación política sistemática.
- Los cambios en las dinámicas políticas en Venezuela están generando efectos colaterales, como cierres fronterizos y aumento de las migraciones. Esta inestabilidad facilita la expansión de los GANE hacia corredores estratégicos, escalando riesgos de protección como el reclutamiento forzado y el uso de artefactos explosivos improvisados (AEI).
- Las anticipadas anomalías de precipitación y temperatura entre abril y agosto de 2026 probablemente generarán inundaciones (especialmente en junio), incendios forestales (principalmente entre abril y mayo) y condiciones secas localizadas, afectando la salud, los medios de vida y el acceso a servicios de comunidades que aún se están recuperando de las inundaciones de 2025.
- La convergencia de estos factores indica un aumento en la severidad de las necesidades humanitarias, donde las comunidades indígenas, los niños, niñas y adolescentes (NNA), y las poblaciones migrantes y refugiadas enfrentan los mayores riesgos. Se espera que la magnitud de la crisis supere la capacidad de respuesta local, afectando principalmente a quienes son víctimas de extorsión sistemática en áreas rurales dispersas.

Mapa 1. Vichada, indicadores contextuales clave



Fuentes: ACAPS con datos de RUNAP (consultado 20/03/2026); Datos Abiertos (consultado 20/03/2026); HDX (consultado 19/03/2026); WB (consultado 19/03/2026); Amazon Underworld (06/11/2025 a y 06/11/2025 b); Indepaz (08/2025)

Nota: las rutas estratégicas de tránsito de los GANE mapeadas comprenden territorios bajo control o disputa de los GANE que cumplen funciones operativas, económicas y militares clave. El uso de dichas rutas va más allá de la movilidad y el tráfico, sirviendo también como áreas de reclutamiento, control social y violencia selectiva (Indepaz 08/2025). Los símbolos de extracción mineral ilegal identifican lugares donde se ha registrado la extracción de minerales críticos, incluidos bauxita, casiterita, coltán, cobre, grafito, hierro, manganeso, níquel, tierras raras, tungsteno y uranio. Estas actividades se localizan frecuentemente dentro o cerca de resguardos indígenas y áreas protegidas (Amazon Underworld 06/11/2025 a y 06/11/2025 b).

ACERCA DE ESTE INFORME

Objetivo

Este informe busca analizar los posibles impactos humanitarios y los factores que impulsarían un deterioro de la situación humanitaria en el departamento de Vichada, Colombia, entre mayo y agosto de 2026, periodo en el que se prevén las elecciones nacionales y la ocurrencia de eventos climáticos. El informe pretende identificar los principales factores de riesgo y las probables implicaciones para las necesidades humanitarias en los distintos sectores.

Alcance

Este análisis aplica un enfoque interseccional al desagregar las necesidades específicas y considerar cómo los impactos humanitarios pueden diferir entre poblaciones de acuerdo con su etnia, género, estatus migratorio y edad. Se presta especial atención a poblaciones con mayor exposición a enfrentamientos, incluidas las comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, y migrantes y refugiados. El análisis cubre el periodo de mayo a agosto de 2026 y se enfoca en dinámicas emergentes con el potencial de contribuir al aumento de las necesidades humanitarias.

Metodología

Este análisis se basa en una revisión de datos secundarios, incluyendo más de 112 informes, evaluaciones humanitarias y gubernamentales, y productos de monitoreo de protección relevantes para el contexto humanitario en Vichada. También se realizaron 12 entrevistas con informantes clave (EIC) entre febrero y marzo de 2026 con organizaciones humanitarias, instituciones públicas y organizaciones locales que operan o monitorean distintos municipios del departamento. Estas entrevistas aportaron información sobre riesgos, limitaciones y tendencias emergentes.

Los hallazgos de fuentes secundarias y entrevistas se triangularon para identificar patrones y factores de riesgo consistentes. El análisis se centra en señales de un posible deterioro, impactos sectoriales y necesidades humanitarias.

Los datos sobre acceso a servicios se basan en la Encuesta de Calidad de Vida 2024 y el Índice de Pobreza Multidimensional. Los datos a nivel municipal dependen de la información más reciente disponible de 2018, lo que puede afectar la interpretación de las necesidades actuales.

Limitaciones y vacíos de información

Este análisis está sujeto a varias limitaciones de datos y vacíos de información que afectan la capacidad de evaluar plenamente los riesgos y necesidades humanitarias en Vichada. La ausencia de datos desagregados por edad, género o discapacidad limita la evaluación de los riesgos de protección diferenciados y los impactos sectoriales. La información disponible usualmente contribuye a cifras agregadas, lo que limita el análisis de los impactos diferenciados en grupos poblacionales específicos.

También existe información limitada sobre migrantes, refugiados y poblaciones LGBTQ+ en el departamento. Estos grupos pueden enfrentar riesgos de protección específicos, barreras para acceder a servicios e impactos derivados de las acciones de los GANE, pero los datos e informes disponibles aportan información limitada sobre su situación humanitaria (DP 04/12/2025).

Es probable que los incidentes relacionados con protección presenten un subregistro significativo, particularmente en lo relativo a la violencia basada en género (VBG) y al reclutamiento y uso de NNA por parte de GANE. El miedo a represalias, estigma, mecanismos débiles de reporte y limitada presencia institucional en áreas remotas contribuyen al subregistro. Los incidentes reportados pueden subestimar la magnitud real de los riesgos de protección.

Finalmente, existe evidencia reducida sobre las implicaciones humanitarias de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que limita directamente con Vichada, Colombia. La falta de información restringe la evaluación de los posibles impactos de esta intervención sobre las dinámicas humanitarias del departamento.

Terminología

Grupos Armados No Estatales (GANE): entidades no afiliadas oficialmente al Estado pero suficientemente organizadas para participar en hostilidades reconocidas bajo el derecho internacional como ‘conflicto armado’, a menudo con motivaciones políticas. Los siguientes GANE están reconocidos en el ecosistema humanitario de Colombia y son mencionados en este informe.

- **Grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP):** grupos de combatientes de las antiguas FARC-EP que se han opuesto o han estado en desacuerdo con el proceso de paz con el Gobierno colombiano desde 2016 (InSight Crime 11/03/2024).
- **Estado Mayor Central (EMC):** una alianza de varios grupos que pertenecían a las ahora desmovilizadas FARC-EP, liderada por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Gentil Duarte’ (El País 16/04/2023; InSight Crime 14/06/2024).
- **Segunda Marquetalia (SM):** la segunda (junto con el EMC) de las dos alianzas de grupos armados que pertenecían a las desmovilizadas FARC-EP, liderada por los excomandantes alias ‘Iván Márquez’, alias ‘Jesús Santrich’, alias ‘Romaña’ y alias ‘El Paisa’ (CORE 26/07/2021; El País 21/04/2023; EE 09/02/2024).
- **Ejército de Liberación Nacional (ELN):** establecido en los años sesenta y con expansión hacia Venezuela, operando en ambos países (InSight Crime 12/01/2026).
- **Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC):** establecidas tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, actualmente conocidas como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) (Badillo and Mijares 16/01/2022).
- **Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC):** grupo armado de derecha establecido para combatir guerrillas de izquierda, que opera a través de redes en Venezuela y Brasil. Tras su desmovilización formal en 2011, surgieron dos facciones rivales: Bloque Meta y Libertadores del Vichada (InSight Crime 10/03/2017).

- **Puntilleros:** Formados a partir de la fusión del Bloque Meta y Libertadores del Vichada bajo el mando de alias ‘Puntilla’, controlan rutas clave de narcotráfico desde Meta hasta la frontera con Venezuela (InSight Crime 14/03/2018). Sin embargo, miembros de Libertadores del Vichada se separaron posteriormente, reconstituyéndose como una facción escindida independiente que continúa supervisando el cultivo de cocaína, las rutas de narcotráfico y una red de sicarios (InSight Crime 23/03/2021).

TABLA DE CONTENIDO

Panorama de la crisis.....	4
Causantes	4
Factores agravantes	6
Posibles efectos sobre las necesidades humanitarias	11
Poblaciones en alto riesgo	18

PANORAMA DE LA CRISIS

Vichada se encuentra en la región oriental de la Orinoquia colombiana, limitando con Arauca, Guainía, Meta y Venezuela a lo largo del río Orinoco. Vichada comparte una frontera de 529 km con Venezuela a través de los municipios de Puerto Carreño y Cumaribo (Legiscomex 19/09/2025). En 2026, el departamento tiene una población estimada de 154.000 habitantes, de los cuales más del 69,5% pertenecen a pueblos indígenas, incluidos los Curripaco, Piaroa y Sikuaní (DANE 30/07/2025; CINEP 19/09/2025).

El territorio se caracteriza por una baja densidad poblacional, asentamientos dispersos y un acceso limitado a servicios básicos, y está dividido en cuatro municipios distribuidos en ecosistemas de sabana y ríos: Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño (capital del departamento) y Santa Rosalía (OCHA 03/03/2026; IDEAM 16/03/2026).

La agricultura de subsistencia, la ganadería y la pesca son las principales fuentes de medios de vida del departamento. En las áreas rurales con limitada presencia estatal, las economías ilegales —incluidos el narcotráfico y la minería vinculada al coltán— han ganado relevancia, particularmente entre las comunidades a lo largo de la frontera con Venezuela (GFI/CEALDES 18/12/2025; Amazon Underworld 19/12/2025). La marginación económica genera una dependencia que los GANE aprovechan para consolidar su control territorial. Este entorno coercitivo se ve agravado por el ciclo electoral de 2026, ya que los GANE aprovechan los vacíos existentes para influir en la gobernanza local, intensificando aún más los riesgos de protección y la privación de servicios esenciales para la población civil (DP 28/10/2025; OCHA 03/03/2026; Min Salud 31/01/2024).

En la frontera, la incertidumbre geopolítica tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en enero de 2026, podría incrementar los riesgos de propagación de grupos armados, movimientos poblacionales y cambios en el control sobre las economías ilegales, especialmente las rutas mineras (GFI/CEALDES 18/12/2025; EHP Colombia et al. 13/01/2026). Las anomalías de precipitación y temperatura entre abril y agosto de 2026 probablemente generarán inundaciones, incendios forestales y periodos secos, aumentando aún más las necesidades y dificultando el acceso a servicios básicos, ya que el departamento aún se recupera del impacto de las inundaciones de 2025 (El Morichal 05/08/2025; DP 28/10/2025; IDEAM 16/03/2026).

La convergencia del aumento de la violencia de los GANE durante los periodos electorales y la inestabilidad vinculada a los eventos en Venezuela, podrían generar múltiples riesgos humanitarios. Junto con la violencia armada, la vulnerabilidad estructural y las amenazas climáticas anticipadas podrían impulsar un deterioro de las condiciones humanitarias en Vichada entre mayo y agosto de 2026.

CAUSANTES

Elecciones democráticas, influencia y reposicionamiento de los GANE

El principal causante de la crisis es el reposicionamiento estratégico de los GANE tras el colapso del pacto de no agresión entre el ELN y la SM en agosto de 2025. Esta ruptura ha transformado al departamento de una zona de relativa estabilidad a un contexto de disputa territorial intensificada, incrementando riesgos de protección como confinamientos, restricciones a la movilidad y desplazamientos (EIC 24/02/2026 b; Cambio 06/11/2025; DP 28/10/2025). El ciclo electoral de 2026 (mayo–junio) actúa como un catalizador clave, ya que los GANE aprovechan la fragilidad institucional para consolidar su control social y asegurar los corredores económicos ilegales mediante la coerción a civiles.

La ruptura de la alianza ELN–SM está generando violencia selectiva y desconfianza entre los GANE, reforzando los esfuerzos para imponer control social sobre las comunidades a fin de proteger los intereses estratégicos de narcotráfico y minería de coltán (DP 28/10/2025). Vichada, con una ubicación geográfica estratégica, ha sido históricamente afectada por dinámicas de conflicto vinculadas a disputas territoriales entre GANE y la fuerza pública colombiana (UBPD 12/2024). La reconfiguración actual, impulsada por la extracción y comercialización del coltán, ha atraído nuevos GANE que buscan consolidar su control territorial. Esta expansión incrementa el riesgo de confrontaciones e intensifica el control sobre la población, incluyendo intentos de influir en estructuras de gobernanza local (DP 28/10/2025; Semana 22/03/2025).

Las elecciones presidenciales de 2026 brindan una oportunidad para que los GANE impongan violentamente alineamientos políticos y sociales (La Silla Vacía 07/07/2025). Esta influencia se materializa mediante mecanismos específicos, como coerción al votante, intimidación a candidatos y presencia de personas armadas cerca de los puestos de votación para restringir la movilidad. La evidencia del ciclo electoral de

2022 confirma este patrón, ya que Puerto Carreño y Cumaribo fueron clasificados con riesgo alto y medio debido a dinámicas similares de coerción armada e incertidumbre territorial (MOE 25/05/2022). Los GANE aprovechan estos periodos para consolidar su control social sobre los líderes comunitarios y los procesos locales de inscripción para votación (MOE 04/02/2026).

El municipio de Cumaribo enfrenta el mayor riesgo electoral del departamento, con un riesgo extremo asociado a factores de violencia (MOE 04/02/2026; La Silla Vacía 05/02/2026). Se observan patrones y dinámicas similares de los GANE en departamentos vecinos –Arauca, Casanare y Meta– donde la participación electoral atípica sugiere coerción (MOE 04/02/2026; Vichada Al Día 13/02/2026; La Silla Vacía 30/05/2025).

El encarcelamiento en 2025 del exgobernador de Vichada por peculado erosionó significativamente la legitimidad estatal y debilitó la capacidad administrativa, permitiendo a los GANE intentar sustituir la autoridad institucional mediante mecanismos coercitivos, influyendo sobre el comportamiento electoral durante las elecciones de 2026 (MOE 04/02/2026; La Silla Vacía 05/02/2026 y 30/05/2025; El Morichal 13/02/2026).

Las dinámicas electorales también pueden reducir la capacidad de respuesta de emergencia, ya que el cambio administrativo y las restricciones legales bajo la Ley 996/2005, que prohíbe la contratación directa y los convenios interinstitucionales cuatro meses antes de las elecciones, limitan la continuidad operativa y la financiación flexible de las autoridades departamentales. Esta limitación influye en la atención a desplazamientos o amenazas climáticas, particularmente entre mayo y agosto (Secretaría Jurídica 05/10/2022; EIC 24/02/2026 c; EIC 12/02/2026).

Las elecciones también generan movimientos de comunidades indígenas y migrantes y refugiados en flujos migratorios mixtos hacia centros urbanos como Puerto Carreño, creando riesgos de manipulación política por parte de grupos armados y políticos, incluido el uso indebido de los procesos de registro de identidad (EIC 26/02/2026 b; EIC 24/02/2026 d; El Morichal 16/01/2026). Estos movimientos resultan en hacinamiento temporal y en la privación deliberada de servicios básicos en espacios públicos, ya que las instituciones locales carecen del personal y los recursos para gestionar el aumento de necesidades (EIC 23/02/2026; EIC 24/02/2026 c).

La concentración de población probablemente incrementará los riesgos sanitarios derivados de enfermedades transmitidas por vectores, las limitaciones de saneamiento y la exposición a mosquitos, junto con incidentes de protección como VBG, superando la capacidad de las instituciones locales.

Inestabilidad política en Venezuela

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero y la captura de su presidente, que forzó una transición política, los GANE aprovecharon la disminución de la vigilancia fronteriza por parte del ejército venezolano para consolidar su control sobre corredores estratégicos. Estas acciones generaron dos consecuencias humanitarias en Vichada: un aumento de los flujos migratorios mixtos por rutas informales, superando las capacidades de respuesta local en Puerto Carreño y Cumaribo, y una escalada en los riesgos de protección a medida que los GANE se internaron más profundamente en territorio colombiano y venezolano para asegurar intereses económicos ilegales (EIC 20/02/2026; La Silla Vacía 14/01/2026; InSight Crime 08/08/2025).

A diferencia de patrones anteriores, las llegadas actuales corresponden a personas que huyen de confrontaciones activas entre GANE. En el Parque Nacional Yacapana de Venezuela, los esfuerzos de los GANE por asegurar intereses de minería ilegal han llevado a una presencia intensificada, escalando los riesgos de protección y causando desplazamientos, ya que las poblaciones se ven forzadas a buscar seguridad en territorio colombiano (EIC 20/02/2026; EIC 27/02/2026 b).

A medida que las poblaciones huyen del reposicionamiento de los grupos armados, el desplazamiento podría afectar a todos los departamentos fronterizos (EIC 27/02/2026 b). Estos flujos ya están sobrepasando significativamente los frágiles servicios básicos de Vichada, particularmente en WASH y salud. La falta de registro oficial a través de rutas de cruce informales genera un riesgo de protección, ya que los migrantes y refugiados de Venezuela y las comunidades indígenas quedan excluidos de la asistencia formal y enfrentan una mayor exposición al reclutamiento, la trata de personas y la explotación laboral en los sectores de minería ilegal.

Las reuniones entre el ELN y la SM en Apure, Venezuela, para coordinar la extracción y comercialización transfronteriza de minerales también agravan los riesgos de protección para las poblaciones migrantes y refugiadas (El Colombiano 28/04/2025).

En un escenario de riesgo anticipado, una mayor presencia militar internacional, específicamente de fuerzas estadounidenses, podría desencadenar una respuesta militar defensiva tanto de la fuerza pública venezolana como de la colombiana. Esta escalada probablemente empujaría a los GANE más profundamente hacia Vichada para mantener el control de las rutas estratégicas de tránsito y los corredores de economías ilegales, aumentando aún más los riesgos para civiles y limitando el acceso humanitario (EIC 27/02/2026 b).

Sin una respuesta institucional robusta, la convergencia de la expansión territorial de los GANE y la llegada de poblaciones indocumentadas a Vichada probablemente resultará en una crisis humanitaria prolongada en la que los riesgos de protección se ven agravados por un contexto con un acceso y limitado a los servicios esenciales.

FACTORES AGRAVANTES

Cambio climático y amenazas naturales

Vichada enfrenta una creciente exposición a anomalías de precipitación y temperatura impulsadas por el cambio climático, así como a la variabilidad de El Niño y La Niña, generando inundaciones frecuentes, deslizamientos y periodos secos. Décadas de prácticas intensivas agrícolas y ganaderas han degradado el medio ambiente, aumentando la vulnerabilidad a los choques climáticos. Entre 1985 y 2017, el departamento perdió el 60% de su cobertura forestal (Vitar-Mendoza et al. 21/12/2021; MADS 22/04/2023; USAID 29/11/2023).

Las anomalías anticipadas de precipitación y temperatura entre mayo y agosto de 2026 probablemente generarán inundaciones durante el pico de lluvias y la temporada de riesgo de incendios forestales, afectando el acceso a los servicios de WASH, salud y educación en Vichada y potencialmente aumentando las necesidades de seguridad alimentaria, salud y protección. Las comunidades aún se recuperan de las severas inundaciones e incendios forestales en la frontera Colombia–Venezuela en 2025. Esto sigue siendo una preocupación crítica ya que, desde marzo de 2025, más de 124.000 personas, principalmente de comunidades indígenas, rurales, y migrantes y refugiados, en las regiones de Orinoquia y Amazonia se han visto afectadas por desbordamientos de ríos y aumento de las lluvias (OCHA 28/08/2025).

Riesgo de inundaciones

Los pronósticos de precipitación anticipan lluvias aproximadamente 20% por encima del promedio (25–50 mm) en el suroccidente de Vichada en junio, incrementando el riesgo de inundaciones en el pico de la temporada de lluvias. Los mismos pronósticos muestran condiciones favorables para precipitaciones cercanas al promedio o por debajo del promedio en abril, mayo, julio y agosto, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones. Sin embargo, estos pronósticos brindan promedios estacionales y no la distribución de lluvias a lo largo de la temporada (IDEAM 16/03/2026). Esto significa que las lluvias podrían ocurrir en episodios cortos e intensos en lugar de estar distribuidas uniformemente, limitando la retención de humedad del suelo e incrementando el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Entre mayo y junio de 2025, las lluvias intensas afectaron a más de 11.600 personas, incluidas más de 4.700 personas indígenas, 736 trabajadores rurales y alrededor de 1.030 migrantes y refugiados (OCHA 17/07/2025; El Morichal 05/08/2025). Más de 1.600 familias fueron desplazadas, cerca de 4.500 hectáreas de tierra cultivable fueron destruidas, más de 1.600 viviendas resultaron dañadas, siete puentes colapsaron y múltiples vías primarias y secundarias fueron destruidas (El Morichal 05/08/2025; OCHA 29/07/2025).

Las inundaciones también dañaron al menos 16 instituciones educativas, interrumpiendo el acceso a la escolarización y a los programas de alimentación escolar, y restringiendo además la movilidad y el acceso a los servicios de salud (El Morichal 05/08/2025). Puerto Carreño fue el municipio más afectado, con aproximadamente 5.200 personas afectadas (OCHA 17/07/2025). Las familias que aún se recuperan de las inundaciones de 2025 han quedado expuestas a las amenazas de 2026.

Figura 1. Matriz de pronóstico climático, Vichada (abril-agosto de 2026)

Periodo	Anomalías de precipitación	Anomalías de temperatura	Riesgo de incendios
ABRIL 2026	<p>● Deficit</p> <p>Precipitación 25% (hasta 100 mm) por debajo de los promedios históricos en el centro de Vichada</p>	<p>● Regular</p> <p>Cerca de los promedios históricos ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)</p>	<p>● Alto</p> <p>El riesgo se mantiene elevado debido a los déficits de precipitación</p>
MAYO 2026	<p>● Deficit</p> <p>Precipitación 50% (hasta 200 mm) por debajo de los promedios históricos en el oriente y occidente de Vichada</p>	<p>● Regular</p> <p>Cerca de los promedios históricos ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)</p>	<p>● Alto</p> <p>El riesgo se mantiene elevado debido a los déficits de precipitación</p>
JUNIO 2026	<p>● Exceso</p> <p>Precipitación 20% (25–50 mm) por encima del promedio histórico en el suroeste de Vichada</p>	<p>● Regular</p> <p>Cerca de los promedios históricos ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)</p>	<p>● Moderado</p> <p>En zonas con baja precipitación</p>
JULIO 2026	<p>● Regular</p> <p>Cerca de los promedios históricos ($\pm 20\%$, hasta $\pm 75\text{ mm}$) en la mayor parte de Vichada</p>	<p>● Alto</p> <p>Entre $1,5-2,0^{\circ}\text{C}$ por encima de los promedios históricos</p>	<p>● Moderado</p> <p>En zonas con baja precipitación, debido a las altas temperaturas</p>
AGOSTO 2026	<p>● Deficit</p> <p>Entre 30-40% (75–150 mm) por debajo de los promedios históricos (noreste de Vichada); cerca del promedio en el resto del departamento</p>	<p>● Alto</p> <p>Entre $1,5-2,0^{\circ}\text{C}$ por encima de los promedios históricos</p>	<p>● Moderado</p> <p>En zonas con baja precipitación, debido a las altas temperaturas</p>

Fuentes: ACAPS con datos de IDEAM (16/03/2026, 09/03/2026, y 10/03/2026)

Nota: aunque este pronóstico climático se basa en publicaciones oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, los informes varían en función de la disponibilidad de información. ACAPS interpretó estos pronósticos agregando las perspectivas mensuales en la matriz de impacto para identificar riesgos humanitarios sostenidos a lo largo del periodo.

Riesgo de sequía

Los pronósticos estacionales anticipan déficits de precipitación del 50% en mayo en todo Vichada. Tras un periodo de precipitaciones por encima y cercanas al promedio en junio y julio, se espera que esta tendencia de déficit se reanude en agosto, con precipitaciones en el noreste de Vichada que se espera estén entre 30–40% (75–150 mm) por debajo de los promedios históricos, incrementando los riesgos de sequía (IDEAM 09/03/2026 y 16/03/2026).

Las condiciones secas probablemente se verán agravadas por El Niño, que se espera se desarrolle a finales de septiembre y podría suprimir aún más las precipitaciones en octubre–noviembre (NOAA 13/04/2026). El acceso al agua y al saneamiento también podría verse limitado en áreas afectadas por déficits de lluvia, incrementando los riesgos sanitarios, con presión sobre el ya limitado acceso al agua en asentamientos rurales agravado por infraestructura hídrica obsoleta y un rápido crecimiento poblacional en áreas urbanas densamente pobladas (El Morichal 03/02/2024). En 2024, Vichada experimentó una crisis severa de seguridad alimentaria, impulsada en gran medida por los impactos de El Niño sobre la producción y disponibilidad local de alimentos, específicamente en la agricultura de subsistencia (ACAPS 07/03/2024).

Riesgo de incendios forestales

La combinación de precipitaciones por debajo del promedio en mayo y agosto y temperaturas por encima del promedio en julio y agosto implica que el riesgo de incendios forestales probablemente se mantenga de moderado a alto más allá de la temporada pico, que normalmente termina en marzo (IDEAM 09/03/2026). Entre febrero y marzo de 2026, la crisis de incendios forestales de Vichada escaló de una amenaza localizada en el norte a una emergencia departamental (IDEAM 10/03/2026 y 10/02/2026). Para el 10 de marzo, los cuatro municipios de Vichada habían sido puestos en alerta roja, reflejando un riesgo crítico en todo el territorio. Esto representó un rápido deterioro desde febrero, cuando los municipios del sur, como Cumaribo, mantenían en alerta baja (IDEAM 10/03/2026, y 10/02/2026).

Dado que el humo de los incendios forestales puede viajar largas distancias por la circulación atmosférica, sus impactos en la salud suelen extenderse más allá de las áreas directamente afectadas por los incendios (EIC 25/02/2026; OPS 06/02/2025). En el primer semestre de 2025 y los primeros meses de 2026, los incendios forestales en

Venezuela deterioraron significativamente la calidad del aire en Puerto Carreño y ciudades aledañas, donde los sistemas de monitoreo registraron alertas amarillas y naranjas por partículas finas transportadas por los vientos (EIC 25/02/2026; OPS 06/02/2025; Pulzo 10/03/2026).

En Vichada, estas condiciones agravaron los riesgos humanitarios al aumentar los movimientos poblacionales para evitar el humo y otros efectos de los incendios, incrementando el uso de albergues improvisados temporales en los que se incrementan el hacinamiento, la limitada provisión de servicios y la exposición a la violencia (EIC 25/02/2026).

El humo de los incendios forestales contiene altas concentraciones de contaminantes atmosféricos generados por la quema de biomasa, incluidos material particulado fino, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno, que representan riesgos significativos para la salud pública (EIC 25/02/2026; OPS 06/02/2025; El País 23/02/2026). Las partículas finas son particularmente peligrosas porque pueden penetrar en los pulmones y contribuir a enfermedades respiratorias y cardiovasculares (OPS 06/02/2025; Pulzo 10/03/2026).

También se han reportado incendios intencionales en el ecosistema de sabana como parte de prácticas agrícolas de despeje de tierras. Las comunidades rurales queman tierras con la creencia de que el fuego mejora la calidad de los pastos para el pastoreo de ganado, aunque la efectividad de esta práctica permanece incierta y puede incrementar significativamente los riesgos de incendios forestales durante periodos secos y de altas temperaturas, especialmente entre mayo y julio (IDEAM 09/03/2026; EIC 23/02/2026).

Estas dinámicas ocurren junto con presiones ambientales más amplias vinculadas a la degradación de ecosistemas, incluida la expansión de plantaciones de monocultivo de eucalipto y acacia en miles de hectáreas de sabana, intensificando aún más la degradación del ecosistema de Vichada y contribuyendo a la vulnerabilidad climática y a los riesgos para los medios de vida en la región fronteriza (Mutante 09/06/2025).

GANE y economías ilegales

En Vichada, la fragmentación de los GANE y la creciente competencia por las economías ilegales están intensificando el control territorial, impulsando riesgos de protección principalmente para las comunidades indígenas Barí, Baruyo, Guainay y Mapoyo desde Venezuela hasta Puerto Carreño (EIC 24/02/2026 d). A medida que múltiples grupos compiten por corredores estratégicos y áreas extractivas, las comunidades enfrentan mayores riesgos de desplazamiento, restricciones a la movilidad, extorsión y represalias, particularmente en áreas remotas con limitada presencia estatal. Estas dinámicas probablemente restringirán aún más el acceso humanitario y reducirán la capacidad de supervivencia.

El ELN y la SM mantienen presencia en Vichada, influyendo en economías ilegales clave a lo largo de la frontera. El ELN también opera desde la vecina Venezuela, participando en la minería de oro y actividades transfronterizas, mientras que facciones de la SM están presentes en los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño (EIC 20/02/2026; Indepaz 08/2025). Desde 2025, GANE adicionales, incluidos grupos vinculados al EMC y estructuras más pequeñas como ERPAC, Puntilleros y Libertadores del Vichada, han intentado expandirse hacia el departamento, contribuyendo a su contexto fragmentado (DP 28/10/2025; El Morichal 06/08/2025; Min Salud 31/01/2024).

La presencia de los GANE en Vichada está vinculada a la ubicación estratégica del departamento para las economías ilegales, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal. El departamento es parte de un corredor clave que conecta la región de la Orinoquia con Venezuela y Brasil a través de los ríos Guaviare, Meta y Orinoco, facilitando el movimiento de bienes ilegales (GFI/CEALDES 18/12/2025; Indepaz 08/2025). El control sobre estas rutas permite a los GANE consolidar el narcotráfico transfronterizo y ejercer control social y económico sobre las comunidades ribereñas, particularmente en áreas con limitada presencia estatal (GFI/CEALDES 18/12/2025; CINEP 19/09/2025; UBDP 12/2024). Este control se ejerce mediante extorsión, reclutamiento, amenazas y restricciones a la movilidad, limitando el acceso a servicios y medios de vida (EIC 25/02/2026).

Desde 2020, la minería ilegal, particularmente de coltán y arenas ricas en minerales, se ha convertido en un causante clave que atrae a los GANE (Voragine 19/01/2026). Vichada y el vecino departamento de Guainía contienen algunas de las mayores reservas de coltán de Colombia, ubicadas principalmente en áreas boscosas

remotas dentro de reservas naturales designadas bajo la Ley 2 de 1959 como zonas protegidas a pesar de la presencia de recursos minerales (GFI/CEALDES 18/12/2025).

Los GANE controlan la extracción, el transporte y la legalización fraudulenta de minerales antes de la exportación internacional (GFI/CEALDES 18/12/2025; Caracol 22/05/2025; Semana 22/03/2025). La alta demanda de coltán, ampliamente utilizado en componentes electrónicos, genera fuertes incentivos financieros para que los grupos armados controlen las áreas mineras. Se estima que el tráfico de coltán puede generar hasta USD 130 millones al mes (aproximadamente COP 455.000 millones) en los mercados internacionales y alrededor de USD 45.000 (aproximadamente COP 158 millones) en los mercados ilegales, reforzando la competencia por el control territorial sobre la extracción (El Colombiano 28/04/2025; Semana 22/03/2025). Esto incrementa la presencia armada en las zonas de extracción e intensifica la presión sobre las comunidades mediante coerción, colaboración forzada y restricciones a la movilidad.

Las poblaciones indígenas y rurales a lo largo de los corredores ribereños estratégicos se ven afectadas de manera desproporcionada por estas dinámicas. En áreas como Aceitico, Casuarito, La Primavera, La Venturosa y zonas fronterizas alrededor de Puerto Carreño y el sur de Cumaribo, las comunidades enfrentan mayores riesgos de protección vinculados a la movilidad de los grupos armados y al control territorial (EIC 27/02/2026 a; EIC 25/02/2026).

La minería ilegal también causa daños ambientales mediante la deforestación, la alteración de cauces de ríos y la contaminación del agua (Voragine 19/01/2026; El Morichal 06/08/2025; GFI/CEALDES 18/12/2025). Estos impactos reducen el acceso al agua segura y a las fuentes de alimentos, afectando la salud y los medios de vida de las comunidades dependientes de los sistemas fluviales. La degradación ambiental incrementa aún más la vulnerabilidad ante choques climáticos, reduciendo la capacidad de supervivencia en contextos de inundaciones o sequías.

De cara a mayo–agosto de 2026, la continua fragmentación de los GANE y la sostenida demanda de economías ilegales probablemente intensificarán la competencia por el control territorial. Se espera que esto incremente los incidentes de protección, incluidos el desplazamiento, las restricciones a la movilidad y las amenazas contra líderes comunitarios y civiles percibidos como afines a grupos rivales (EIC 20/02/2026). Ya se han reportado confinamientos desde finales de 2025, particularmente en áreas fronterizas, incluidos Aceitico, Casuarito, La Primavera,

La Venturosa, Nueva Antioquia y Puerto Murillo (EIC 27/02/2026 b; EIC 25/02/2026; EIC 24/02/2026 b). Estas dinámicas probablemente restringirán aún más el acceso humanitario y limitarán el acceso a los servicios básicos, especialmente en áreas fronterizas remotas a las que los trabajadores humanitarios ya no pueden ingresar, agravando las necesidades humanitarias.

Cobertura inadecuada de servicios básicos

Las limitaciones estructurales afectan el acceso a los servicios básicos como salud, WASH y seguridad alimentaria en Vichada, y probablemente agravarán el impacto de la violencia armada entre mayo y agosto de 2026. El extremo aislamiento geográfico, la alta dispersión poblacional y la limitada presencia institucional restringen el acceso, tanto logístico como relacionado con la protección, a los servicios de salud, agua, electricidad y educación, reduciendo la capacidad de las comunidades para enfrentar choques y retrasando la respuesta humanitaria (EIC 24/02/2026 c; 3iS/OCHA 31/07/2024).

La infraestructura limitada debilita aún más la continuidad de los servicios en periodos de mayor demanda. Puerto Carreño permanece desconectado de la red eléctrica nacional y experimentó un estimado de 1.986 horas sin electricidad en 2024, equivalentes a tres meses, afectando las comunicaciones, la refrigeración de alimentos y las instalaciones de salud (EIC 02/03/2026; Mutante 09/06/2025). Estas interrupciones probablemente limitarán el funcionamiento de las instalaciones de salud, los sistemas de agua y las comunicaciones durante periodos de mayor violencia o desplazamiento. Al mismo tiempo, los recortes de financiación de Estados Unidos en 2025 redujeron las operaciones humanitarias, ampliando las brechas en la provisión de servicios y la capacidad de respuesta (EIC 24/02/2026 c; ACAPS 16/04/2025).

El acceso a agua potable segura y saneamiento se mantiene críticamente bajo, con el 70,9% de los hogares sin fuentes mejoradas de agua en 2024 (DANE 22/04/2025 a; Min Salud 13/12/2025; OCDE 28/01/2026). Estas condiciones incrementan el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, que contribuyen directamente al empeoramiento de la desnutrición en niños menores de cinco años (3iS/OCHA 31/07/2024). En consecuencia, proveer agua segura sigue siendo una acción humanitaria prioritaria para atender los causantes subyacentes de la malnutrición aguda en Vichada (Min Salud 13/12/2025).

Tabla 1. Acceso a servicios en Vichada, sus municipios y a nivel nacional

Indicador	Nacional	Vichada	Puerto Carreño	La Primavera	Cumaribo	Santa Rosalía
% de hogares con cobertura de electricidad	98.9%	43.4%	75.4%	68.5%	13.2%	68.8%
% de hogares con acceso a gas para cocinar	70.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
% de hogares con acceso a fuente de agua mejorada	91.4%	29.1%	67.7%	84.7%	20.9%	88.0%
% de hogares con cobertura de alcantarillado	76.2%	0.3%	10.0%	5.0%	9.2%	1.7%

Fuente: ACAPS con datos de DANE (24/04/2025, 30/08/2019, 22/04/2025 b, y 22/04/2025 a)

Nota: bajo los estándares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, un hogar es privado del acceso a 'fuente de agua mejorada' si carece de servicios de acueducto. Sin embargo, en contextos rurales, los hogares que usan agua bombeada de pozos se consideran con una fuente mejorada, mientras que aquellos que dependen de lluvia, ríos, manantiales o pozos sin bombas permanecen clasificados como privados (DANE 22/04/2025 c).

El acceso a salud y educación también está severamente restringido. La infraestructura de salud se limita a un único hospital secundario en Puerto Carreño, mientras que la mayoría de los puestos de salud rurales permanecen no funcionales, agravando la severidad de las restricciones de acceso (EIC 26/02/2026 b; El Morichal 22/09/2025). Los largos tiempos de viaje —hasta ocho horas— para acceder a la educación secundaria contribuyen a altas tasas de deserción escolar en las comunidades rurales e indígenas (DANE 22/04/2025 b; CINEP 19/09/2025). En contextos de mayor inseguridad y movilidad restringida, estas limitaciones probablemente reducirán aún más el acceso a los servicios esenciales y aumentarán las necesidades no cubiertas.

Las condiciones son más críticas en Cumaribo, que se proyecta albergará el 74,4% de la población de Vichada para 2026, la mayoría de la cual vive en comunidades rurales e indígenas. El 44,6% carece de seguro de salud y solo el 11% tiene acceso a sistemas de acueducto (DANE 30/08/2019 y 29/02/2024). La presencia de los GANE y el alto riesgo de violencia electoral probablemente restringirán aún más el acceso a los servicios y amplificarán los riesgos de protección y humanitarios en este municipio (MOE 04/02/2026; EIC 25/02/2026).

POSIBLES EFECTOS SOBRE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS

Protección

Los riesgos de protección aumentaron en 2025–2026, particularmente desplazamiento, confinamiento, reclutamiento uso y utilización de NNAs, y las VBG, afectando principalmente a comunidades indígenas, NNA, migrantes y refugiados, y personas en áreas fronterizas y a lo largo de corredores ribereños. Estos riesgos son impulsados por la competencia entre GANE tras la ruptura de alianzas, que ha intensificado el control territorial, las confrontaciones armadas y la presión sobre las poblaciones civiles.

La ruptura, que puso fin a un acuerdo de dos años de control compartido sobre las rutas de narcotráfico y minería ilegal, desencadenó una reconfiguración de la presencia de los grupos armados en el departamento (EIC 20/02/2026; DP 28/10/2025; Amazon Underworld 19/12/2025). A medida que los grupos se reposicionan para asegurar el control territorial, la probabilidad de confrontaciones armadas y desplazamientos ha aumentado, particularmente en áreas cercanas al río Meta donde el departamento linda con Arauca, y Venezuela, allí se ha identificado la presencia de GANE como ERPAC y Puntilleros (EIC 20/02/2026; EIC 27/02/2026 b; DP 28/10/2025).

El control sobre los corredores ribereños tiene afectaciones directas sobre los riesgos de protección. El río Meta funciona como una ruta estratégica de transporte para los GANE, facilitando el movimiento de personas, armas y bienes vinculados a las economías ilegales. Como resultado, las comunidades ubicadas a lo largo de estas rutas enfrentan exposición a coerción, reclutamiento y restricciones a la movilidad (EIC 20/02/2026; EIC 27/02/2026 a). Estas dinámicas probablemente persistirán durante el periodo de perspectiva, mientras continúa la competencia por el control de los corredores.

El uso de drones agrava aún más los riesgos de protección. Los GANE utilizan drones para monitorear poblaciones y vigilar o atacar grupos rivales, una práctica no reportada en Vichada antes de 2025 (DP 28/10/2025; EIC 24/02/2026 c; EIC 25/02/2026). Esto incrementa la exposición de las comunidades a la violencia y la vigilancia, contribuyendo además al miedo y a la angustia psicológica. El miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones disuaden a las comunidades de reportar incidentes o buscar asistencia, limitando el acceso a los servicios de protección e incrementando el subregistro (EHP Colombia/OCHA 03/03/2026; EIC 26/02/2026 a).

El rol de Puerto Carreño como capital del departamento y su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela han contribuido a su consolidación como un nodo clave de tránsito para las economías de minería ilegal. Su posición geográfica facilita la movilidad transfronteriza y concentración de actividad económica, incrementando la presencia de los GANE tanto en los barrios de la capital como en las áreas periurbanas. En puntos fronterizos como la inspección de Aceitico y barrios como Simón Bolívar, la limitada presencia de las entidades públicas incrementa la exposición a amenazas de protección (EIC 26/02/2026 a; DP 28/10/2025).

Se espera que los riesgos de protección empeoren a medida que la inestabilidad regional vinculada a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el periodo electoral de Colombia, contribuyan al aumento de la actividad de los GANE. Es probable que los grupos armados intensifiquen el control sobre las comunidades para asegurar el dominio territorial y sus intereses económicos. En este contexto, para 2025, varios riesgos de protección se habían identificado en niveles significativamente superiores a los promedios nacionales, incluida la incidencia de violencia sexual (55,17%) y reclutamiento y uso de NNA (30,47%) (ICBF 08/04/2025).

Reclutamiento, uso y utilización de NNA

El significativo subregistro causado por el miedo a represalias, la desconfianza institucional y el aislamiento geográfico implica que las cifras oficiales sobre el reclutamiento y uso de NNA permanecen bajas (EIC 26/02/2026 a; EIC 12/02/2026). En 2025 se registraron 86 casos de NNA asociados con la violencia, aunque solo 16 personas reportaron estos incidentes y solo 14 fueron encontradas, lo que ilustra aún más la magnitud del subregistro (OCHA 03/03/2026).

La brecha en las estadísticas oficiales sugiere que las cifras disponibles representan estimaciones mínimas que no reflejan la escala real del reclutamiento en Vichada. Los menores indígenas que viven en áreas remotas están particularmente expuestos al reclutamiento debido a su proximidad a corredores estratégicos de tráfico y a la limitada presencia institucional en sus áreas (EIC 25/02/2026; ICBF 28/11/2025; MAPP/OEA 02/12/2025).

Los GANE emplean actualmente diferentes estrategias de reclutamiento: usan plataformas de redes sociales como TikTok, WhatsApp y Facebook para mostrar armas y dinero, brindan a los NNA posiciones de poder entre sus pares y expanden el reclutamiento más allá de las áreas de control territorial directo (ACAPS 05/09/2025; EIC 24/02/2026 d). Desde 2025, los GANE en Vichada han introducido a los NNA en la operación de drones como un punto inicial de vinculación, integrando la capacitación tecnológica en los procesos de reclutamiento (EIC 26/02/2026 a). La proximidad de los GANE a las escuelas expone aún más a los NNA al reclutamiento y a otros riesgos de protección alrededor de las escuelas y a través de las redes de pares (LEE 09/04/2025; EIC 20/02/2026).

El reclutamiento también está estrechamente vinculado a las condiciones socioeconómicas en el departamento, particularmente en áreas rurales y fronterizas. En 2024, la pobreza multidimensional de Vichada alcanzó el 20,6% en áreas rurales en comparación con el 7,4% en centros urbanos, y hasta el 50,3% entre las poblaciones migrantes y refugiadas (Min salud 31/01/2024). Los GANE explotan las limitaciones económicas existentes al ofrecer pequeños incentivos, a veces tan bajos como COP 2.000 (USD 0,50), así como alimentos y útiles escolares. Estos incentivos influyen en las estrategias de supervivencia de las familias, ya que el reclutamiento puede ser percibido como un medio para aliviar el estrés económico del hogar o como un causante de migración forzada para evitar el reclutamiento (EIC 24/02/2026 d; EIC 12/02/2026). En consecuencia, el acceso limitado a los medios de vida incrementa significativamente la exposición de los NNA al reclutamiento en áreas remotas.

En noviembre de 2025, siete NNA indígenas fueron llevados desde el asentamiento de Cerro Vita hacia Venezuela (EIC 20/02/2026; EIC 26/02/2026 a). Para prevenir el reclutamiento, las familias están implementando cada vez más estrategias de supervivencia como la matrícula escolar de emergencia o el desplazamiento individual para sacar a los NNA de las áreas de influencia de los GANE (EIC 24/02/2026 d).

“Están llevándose a jóvenes desde Carreño para ser entrenados en Venezuela y posicionados a lo largo de la frontera. Entre los casos hay una familia que pagó extorsión para liberar a un menor y una comunidad indígena que se organizó colectivamente para recuperar a un niño reclutado.” (EIC 26/02/2026 a)

Violencia basada en género

La presencia de los GANE agrava los riesgos de VBG al contribuir a patrones de violencia sexual y explotación contra mujeres, adolescentes y NNA. Entre 2024 y 2025, los casos reportados de violencia sexual aumentaron 17% en Vichada, siendo Puerto Carreño el municipio con el mayor número de casos (Min Defensa consultado 18/03/2025). Aunque los datos disponibles son limitados debido al subregistro, las condiciones actuales sugieren un alto riesgo de VBG, particularmente en áreas con presencia sostenida y control territorial de los GANE.

Estas dinámicas incrementan la exposición a la violencia al imponer restricciones a la movilidad, confinamiento y control sobre las comunidades, frecuentemente forzando a las sobrevivientes a permanecer en entornos inseguros con los perpetradores. Los riesgos afectan de manera desproporcionada a las poblaciones indígenas, migrantes y refugiadas, que enfrentan precariedad económica, marginación social y acceso limitado a los servicios de protección. Notablemente, el 77% de los casos de VBG en 2024 involucraron a personas de nacionalidad venezolana, particularmente expuestas debido a su estatus irregular (ICBF 08/04/2025; Min Salud 31/01/2024). La combinación de la presencia de los GANE, la competencia territorial y la limitada capacidad institucional probablemente aumentará los riesgos de VBG durante el periodo de análisis, particularmente para las poblaciones que ya enfrentan barreras para acceder a los servicios de protección y salud.

La violencia de pareja (IPV) se ve significativamente agravada por el confinamiento y las restricciones a la movilidad impuestas por los GANE. Aunque a menudo hay subregistro o se normalizan estas violencias dentro de ciertas prácticas sociales y culturales, la IPV empeora en dichos contextos porque las mujeres se ven forzadas a permanecer en proximidad prolongada con los perpetradores. En 2024, el 76% de la VBG reportada en Vichada ocurrió en las viviendas de las sobrevivientes y el 51% de las sobrevivientes vivían con sus perpetradores, evidenciando cómo la movilidad restringida y el control social incrementan la exposición a la violencia (EIC 27/02/2026

b; EIC 26/02/2026 b; EIC 12/02/2026; Valledupar Cámara de Comercio 12/06/2025). Estos patrones indican que los mecanismos de control social no solo aumentan la exposición a la IPV, sino que también reducen sistemáticamente el acceso a los servicios de apoyo, dejando a las mujeres en espacios privados inseguros con opciones limitadas para denunciar.

Los matrimonios infantiles y las prácticas sexuales coercitivas vinculadas a las dinámicas de reclutamiento exponen a las niñas en Vichada a riesgos significativos de protección y salud (EIC 24/02/2026 b; EIC 24/02/2026 d). Los GANE usan las relaciones con niñas y adolescentes como una forma de control o estrategia de reclutamiento, incrementando los riesgos de violencia y explotación sexual. Estas dinámicas contribuyen a mayores tasas de embarazo adolescente, asociadas con un aumento de complicaciones de salud materna debido al desarrollo físico incompleto, y a impactos de largo plazo sobre la educación y los medios de vida. Vichada se ve afectada de manera desproporcionada, ya que los nacimientos en adolescentes representan el 24,4% del total de nacimientos en el departamento, por encima del promedio nacional del 15% (LEE 25/10/2025).

En 2025 se registraron 159 casos bajo los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), 110 de los cuales estaban relacionados con violencia sexual (EHP Colombia/OCHA 03/02/2026). Los NNA indígenas, migrantes y refugiados, específicamente en Puerto Carreño, enfrentan mayores riesgos, particularmente quienes viven en las calles o están expuestos a la mendicidad y al consumo de sustancias, lo que incrementa su vulnerabilidad a la explotación y el abuso (EHP Colombia/OCHA 03/02/2026). La expansión de los GANE hacia áreas urbanas indica una mayor exposición de los NNA a la explotación y el abuso sexual, particularmente en contextos donde los servicios de protección permanecen limitados.

En 2025 se reportaron redes de trata de personas y de explotación sexual en Puerto Carreño, incluidos traslados transfronterizos de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (EIC 24/02/2026 c; El Morichal 05/11/2025). En Puerto Carreño, existen preocupaciones severas de protección en torno a niñas que viven con VIH vinculadas a la explotación sexual, el reclutamiento de NNA con discapacidad, y el acceso restringido a los servicios de salud sexual y reproductiva debido al control de los GANE. La violencia sexual probablemente está subregistrada como resultado de las barreras al acceso a atención en salud, el confinamiento y las amenazas contra las comunidades y el personal de salud (EIC 26/02/2026 b; DP 04/12/2025).

Las niñas y adolescentes indígenas son blanco particular de redes de narcotráfico y minería ilegal, frecuentemente expuestas a violencia sexual y trabajo forzado (Indepaz 08/2025). La mayoría de los incidentes de VBG ocurren en espacios privados y permanecen significativamente subregistrados debido al estigma y al miedo. Esta brecha se agrava por una crítica falta de servicios de respuesta a la VBG tanto a nivel departamental como municipal. Las rutas de prevención y respuesta disponibles son insuficientes para cubrir las áreas remotas, dejando a las sobrevivientes con casi ningún acceso a justicia, atención en salud especializada o servicios de protección frente a riesgos crecientes (EIC 12/02/2026; Valledupar Cámara de Comercio 12/06/2025).

“Varias madres han sido desaparecidas, instrumentalizadas o presionadas por grupos armados, forzándolas a huir de sus territorios para proteger a sus hijos del reclutamiento en medio de riesgos interseccionales de violencia sexual, desplazamiento y discriminación.” (EIC 26/02/2026 a)

Control social, ataques a civiles y amenazas

La presencia de los GANE en Vichada resulta en un control social persistente, ya que los GANE imponen toques de queda y controlan las rutas de transporte para facilitar el funcionamiento de las economías ilegales y regular el tránsito estratégico. Este control se ejerce mediante vigilancia, extorsión y apoyo forzado a las operaciones de los grupos armados, incluido el transporte, el alojamiento y la provisión de alimentos y suministros (EIC 24/02/2026 c; EIC 26/02/2026 a; DP 28/10/2026). Entre 2024 y 2025, la extorsión aumentó un 300% en Vichada, reflejando la expansión de estas prácticas como mecanismos de dominio territorial (Min Defensa consultado 18/03/2025). Estas dinámicas restringen la autonomía civil, incrementan la exposición a amenazas de protección y limitan el acceso a los medios de vida y a los servicios básicos.

La coerción económica es generalizada y afecta particularmente a campesinos, comerciantes, trabajadores del transporte y negocios locales, especialmente en Puerto Carreño (EIC 27/02/2026 a; Semana 18/03/2025). En áreas rurales y mineras, las comunidades indígenas enfrentan riesgos adicionales, incluidos trabajo forzado, amenazas y desplazamiento vinculados al control de los sitios de extracción ilegal. Las comunidades o individuos percibidos como opositores a estas actividades están en riesgo de violencia selectiva (EIC 24/02/2026 b; El Colombiano 28/04/2025; Semana 22/03/2025). Estas dinámicas reducen el acceso a los medios de vida, aumentan la presión financiera sobre los hogares, y contribuyen al desplazamiento y a las restricciones a la movilidad dentro del departamento, particularmente en áreas con limitada presencia estatal.

Desplazamiento, confinamiento y restricciones a la movilidad

El desplazamiento en Vichada ocurre principalmente a través de movimientos individuales, impulsados por los altos costos de transporte y las grandes distancias requeridas para llegar a los centros urbanos. Estos movimientos suelen seguir amenazas de los GANE en zonas fronterizas y mineras (EIC 20/02/2026; EIC 26/02/2026 a; El Morichal 06/11/2025). Las dinámicas transfronterizas con Venezuela generan flujos adicionales no registrados a través de rutas fluviales informales, contribuyendo aún más al subregistro sistemático. Este vacío de información se agrava por la falta de presencia estatal y el miedo a represalias, que impiden que las poblaciones desplazadas formalicen su estatus (EIC 20/02/2026; Amazon Underworld 19/12/2025). Aunque el subregistro hace que los datos disponibles sean limitados, las condiciones actuales sugieren un mayor riesgo de desplazamiento, particularmente en áreas con una mayor presencia de los GANE y movilidad transfronteriza.

Donde la movilidad no es factible, las restricciones de los GANE combinadas con los altos costos de transporte y el aislamiento geográfico fuerzan a las comunidades al confinamiento, particularmente en inspecciones como Aceitico, Cumaribo, Garcitas y Puerto Nariño, todas ubicadas a lo largo de la frontera con Venezuela (EIC 12/02/2026; DP 01/09/2026; ICBF 08/04/2025). El miedo a represalias y la dependencia de rutas informales suprimen aún más la documentación formal tanto del desplazamiento como del confinamiento (EIC 24/02/2026 b; EIC 26/02/2026 a). La combinación del control territorial de los GANE, la limitada presencia estatal y el aislamiento geográfico probablemente incrementará los riesgos de confinamiento, restringiendo el acceso a alimentos, mercados y servicios esenciales.

Entre mayo y agosto de 2026, se espera que los riesgos de protección se intensifiquen a medida que convergen la inestabilidad geopolítica resultado de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el ciclo electoral presidencial de Colombia y la competencia territorial de los GANE. Es probable que los GANE consoliden el control sobre las áreas fronterizas, particularmente Aceitico y Simón Bolívar, incrementando la exposición civil a la coerción y al desplazamiento forzado (EIC 27/02/2026 b). Las elecciones presidenciales de Colombia generan condiciones en las que los GANE históricamente han intensificado el control territorial y político, aumentando el riesgo de violencia selectiva contra líderes comunitarios, restricciones a la movilidad y apoyo forzado a candidatos específicos (MOE 04/02/2026).

Se espera que la escalada de las restricciones a la movilidad y del control territorial intensifique los riesgos de protección, particularmente el reclutamiento y uso de NNA y la VBG. En Puerto Carreño y La Primavera, la competencia entre los GANE empuja a las poblaciones desplazadas hacia asentamientos informales, donde la protección institucional es a la vez insuficiente e inaccesible como resultado de las limitaciones de seguridad. En consecuencia, los riesgos de explotación sexual y reclutamiento de NNA indígenas e indocumentados probablemente aumentarán (EIC 25/02/2026; ICBF 08/04/2025). El miedo a represalias y la desconfianza institucional continuarán afectando el registro, lo que llevará a que la magnitud de estas consecuencias de protección permanezca subestimada en el periodo de perspectiva.

Seguridad alimentaria y medios de vida

Desde 2022, la seguridad alimentaria en Vichada se ha deteriorado de manera sostenida. La inseguridad alimentaria moderada o severa afectó al 30,7% de la población en 2022, aumentando al 39,7% en 2023 y al 42,5% en 2024, muy por encima del promedio nacional del 25,55% y una de las tasas más altas a nivel nacional (DANE 22/05/2025; El Morichal 08/07/2025). Aunque los datos disponibles son limitados, las condiciones actuales sugieren un alto riesgo de deterioro adicional durante el periodo de perspectiva, particularmente en áreas afectadas por la presencia de los GANE y las restricciones a la movilidad.

Los medios de vida en Vichada están altamente restringidos y moldeados por las economías ilegales y el control de los GANE. Las disputas territoriales por las rutas de narcotráfico y la minería ilegal han reforzado dinámicas económicas coercitivas en áreas rurales y fronterizas, donde las comunidades enfrentan presión para participar en actividades ilegales con el fin de mantener el acceso a la tierra y los recursos (EIC 20/02/2026; EIC 24/02/2026 b; El Colombiano 28/04/2025). Esto reduce la autonomía económica de los hogares e incrementa la dependencia de fuentes de ingreso inestables y de alto riesgo, como la minería, limitando el acceso a medios de vida sostenibles.

Los medios de vida indígenas y rurales basados en la agricultura a pequeña escala, la pesca y el comercio fluvial se ven particularmente afectados. Las comunidades están cada vez más expuestas a condiciones laborales de explotación en la

minería informal, que se está convirtiendo en una estrategia primaria de medios de vida, mientras reciben beneficios económicos limitados. Al mismo tiempo, los GANE restringen el acceso a la tierra y alteran los patrones estacionales de cultivo, especialmente en resguardos indígenas como Cali-Barranquilla, Ciare, Floresombrero y Guaco (EIC 20/02/2026; Consonante 14/11/2025; El Colombiano 28/04/2025). Estas restricciones reducen la producción de alimentos y la generación de ingresos.

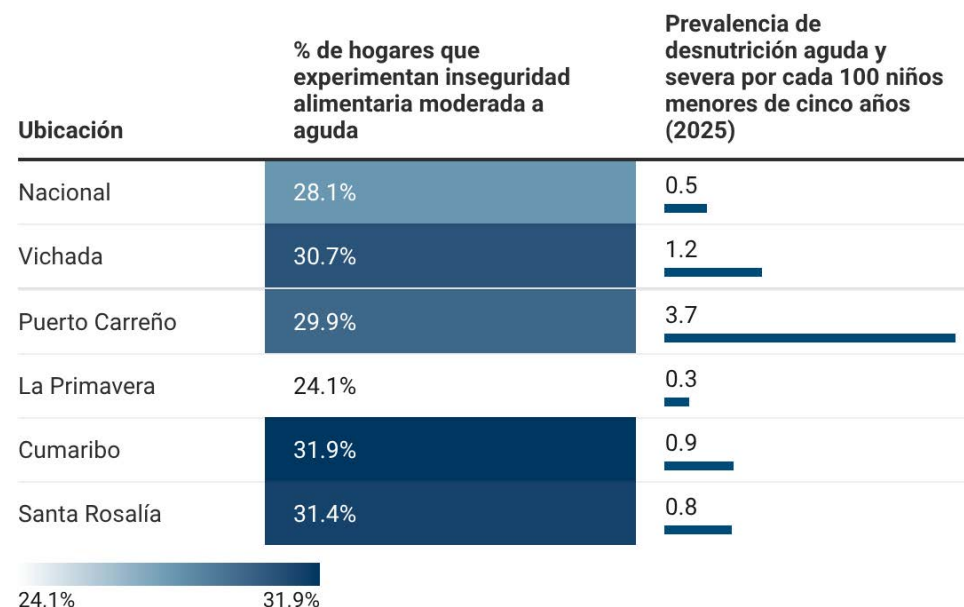
La combinación de la presencia de los GANE, el control territorial, las restricciones a la movilidad y la limitada capacidad institucional, probablemente incrementará las restricciones sobre la disponibilidad, el acceso y la estabilidad de los alimentos durante abril-agosto de 2026. Se espera que los impactos sean particularmente severos para las comunidades ribereñas, los pequeños agricultores que practican autoconsumo y agricultura de subsistencia (predominante en Vichada), y los refugiados, migrantes y comunidades indígenas que enfrentan mayor vulnerabilidad social y económica (El Cuarto Mosquetero 09/08/2025).

El control de los corredores a lo largo de los ríos Guaviare, Meta y Orinoco restringe el acceso a los mercados y al acceso humanitario, particularmente a las riberas fértiles, y reduce las áreas de pesca entre las comunidades ribereñas. El acceso limitado a las tierras de cultivo podría obstaculizar la capacidad de los campesinos para sembrar en abril y manejar los cultivos durante la temporada de crecimiento de mayo a julio, lo que probablemente resultará en cosechas por debajo del promedio a partir de agosto de 2026. Junto con la cosecha de subsistencia de maíz y palma de aceite, Vichada produce aproximadamente el 15% de la soya y el 9% del maíz de Colombia (USDA consultado 24/03/2026).

El impacto de la inseguridad sobre la producción de alimentos probablemente se verá agravado por precipitaciones erráticas o insuficientes, afectando tanto los cultivos de subsistencia como los cultivos comerciales tales como el arroz, el maíz y la palma de aceite (ACAPS 07/03/2024). La agricultura también puede verse afectada por restricciones debido al riesgo de incendios forestales, que pueden interrumpir las prácticas tradicionales de despeje de tierras (IDEAM 10/03/2026 y 10/02/2026). Estos choques combinados probablemente aumentarán la dependencia de fuentes externas de alimentos.

Se espera que el aumento de la extorsión, las interrupciones al transporte fluvial y las restricciones al acceso a las áreas agrícolas y de pesca reduzcan aún más las ya limitadas oportunidades de ingreso e interrumpan tanto la circulación de los mercados como los precios, restringiendo el acceso tanto físico como financiero a los alimentos. Al mismo tiempo, la mayor dependencia de las economías ilegales puede profundizar las condiciones laborales de explotación y la vulnerabilidad económica entre los hogares indígenas y rurales (DP 31/10/2025). Estos patrones, aunque no están plenamente capturados en los datos oficiales, apuntan a un probable aumento de la inseguridad alimentaria, particularmente en los resguardos indígenas con acceso limitado a mercados, asistencia y servicios públicos (EIC 26/02/2026 b; EIC 20/02/2026).

Tabla 2. Estadísticas de seguridad alimentaria para Vichada, sus municipios y a nivel nacional



Fuente: ACAPS con datos de INS (consultado 11/03/2026); DANE (04/07/2023)

Como resultado de la combinación de riesgos, se espera que los municipios fronterizos de Puerto Carreño y Cumaribo enfrenten un aumento de la inseguridad alimentaria dado su ubicación cerca a Venezuela y la alta concentración de comunidades rurales e indígenas dispersas, incrementando la exposición de estas áreas a la movilidad de los grupos armados y a las dinámicas de control territorial (EIC 24/02/2026 c; EIC 23/02/2026). Cumaribo alberga un estimado de 74,4% de la población de Vichada, de la cual el 95,5% es indígena y el 89,1% vive en áreas rurales, lo que lo convierte en un municipio altamente dependiente de la agricultura y la pesca (DANE consultado 09/03/2026).

Educación

El acceso a la educación en Vichada está cada vez más restringido por riesgos de seguridad y brechas estructurales. Desde 2025, la presencia de los GANE ha contribuido a mayores tasas de deserción escolar y a la exposición de los NNA a riesgos de protección como el reclutamiento, uso y utilización, el trabajo infantil y la explotación. Los NNA que viajan a la escuela suelen atravesar áreas con presencia de grupos armados, y se reportan actividades de reclutamiento cerca o dentro de los espacios educativos (EIC 24/02/2026 d; EIC 27/02/2026 a; LEE 09/04/2025). A medida que la inseguridad aumenta, las familias pueden volverse más reacias a enviar a los NNA a la escuela, reduciendo la asistencia y limitando el acceso a la educación y a los servicios basados en la escuela (EIC 24/02/2026 b; LEE 12/06/2025 y 25/10/2025).

En 2026, es probable que estos riesgos se intensifiquen a medida que aumenta la demanda de cupos escolares. Esta demanda es impulsada por la preocupación de los padres de que los NNA fuera de la escuela permanezcan sin supervisión mientras los cuidadores trabajan, incrementando significativamente su exposición al reclutamiento por parte de los GANE (EIC 24/02/2026 d). Sin embargo, la capacidad escolar limitada puede impedir que los NNA fuera de la escuela accedan a estos servicios, potencialmente incrementando la deserción y desencadenando el desplazamiento de familias que buscan cupos escolares disponibles.

La matrícula en las escuelas ubicadas en áreas afectadas por el reclutamiento disminuyó en 2025, ya que los NNA han sido reclutados, utilizados o incentivados a asociarse con por los GANE cada vez más, incluyendo el ser llevados al otro lado de la frontera hacia Venezuela. La presencia de los GANE en o cerca de las escuelas,

así como el uso de NNA dentro de las dinámicas de reclutamiento dirigidas a sus pares, contribuye al deterioro del entorno protector que se espera que las escuelas proporcionen, incrementando el ausentismo entre estudiantes y docentes y, en algunos casos, interrumpiendo la continuidad de los servicios educativos (EIC 24/02/2026 b; EIC 27/02/2026 b; EIC 26/02/2026 a).

Tabla 3. Estadísticas de educación para Vichada, sus municipios y a nivel nacional

Indicador	Nacional	Vichada	Puerto Carreño	La Primavera	Cumaribo	Santa Rosalía
% de la población que es analfabeta	7.1%	35.1%	15.7%	14.7%	26.0%	14.6%
% de hogares con NNA que no asisten a la escuela	1.8%	27.1%	10.4%	8.1%	21.1%	6.0%
% de estudiantes con rezago escolar respecto al grado esperado para su edad	22.0%	35.0%	26.1%	25.0%	47.3%	25.4%

Fuente: ACAPS con datos de DANE (22/04/2025 b, 22/04/2025 a, 31/01/2020)

Nota: el indicador 'hogares con NNA que no asisten a la escuela' se refiere a casos en los que una persona pertenece a un hogar donde al menos un niño de 6 a 16 años no asiste a la escuela (DANE 22/04/2025 c).

WASH y salud

La creciente presencia y el control territorial de los GANE probablemente deteriorarán aún más las condiciones de WASH y salud durante el periodo de análisis. Los grupos armados usan y ejercen control sobre los ríos como corredores clave de transporte para las economías ilegales, restringiendo la capacidad de las comunidades de acceder de manera segura a las fuentes de agua para beber, cocinar y para la higiene. Este control puede limitar cuándo y dónde las comunidades recolectan agua e

incrementar la exposición a fuentes contaminadas. Al mismo tiempo, la expansión de la actividad minera ilegal probablemente empeorará la contaminación tanto del agua superficial como subterránea con contaminación por mercurio, reduciendo aún más la disponibilidad de agua potable segura (EIC 23/02/2026; Consonante 14/11/2025).

El acceso reducido a agua segura y suficiente incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, particularmente entre las poblaciones desatendidas y desnutridas en áreas rurales remotas. Vichada ya muestra condiciones severas: tiene la segunda prevalencia más alta de malnutrición aguda moderada y severa en niños menores de cinco años en Colombia (1,22 por 100), casi tres veces la tasa nacional (INS consultado 11/03/2026). Dentro del departamento, Puerto Carreño registró la prevalencia más alta a nivel nacional en 2025 (3,66 por 100), afectando de manera desproporcionada a las comunidades indígenas (INS consultado 11/03/2026; ICBF 08/04/2025). Estas cifras indican una línea de base crítica, sugiriendo que choques adicionales podrían empeorar rápidamente los resultados en salud.

La combinación de precipitaciones por encima del promedio en junio y temperaturas por encima del promedio en julio-agosto agravará aún más el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como las enfermedades diarreicas agudas, y enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la malaria, en áreas que reciban exceso de lluvias. El riesgo de dengue ya era alto en toda Colombia en marzo de 2026, y Vichada registró un aumento del 64% en los casos en 2025 en comparación con las tendencias de reporte nacional en 2024 (El Universal 07/01/2026; Dengue Visual Atlas consultado 18/03/2026).

El riesgo de incendios forestales probablemente persistirá más allá de la temporada pico de marzo, impulsado por las precipitaciones por debajo del promedio en abril, mayo y agosto y las temperaturas por encima del promedio en julio y agosto. Esto continuará planteando riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, particularmente para los adultos mayores, los NNA y aquellos con condiciones preexistentes.

La inestabilidad hidrológica por exceso o déficit de precipitación también puede afectar el transporte fluvial y la infraestructura vial crítica, potencialmente interrumpiendo la movilidad y el acceso a los servicios esenciales de salud ya afectados por las restricciones y el control social de los GANE (IDEAM 10/03/2026 y 10/02/2026). Es probable que el aumento de los enfrentamientos entre los GANE

conduzca a hacinamiento en los asentamientos informales en Puerto Carreño, incrementando el riesgo de brotes de enfermedades y ejerciendo presión adicional sobre los ya limitados servicios de salud.

Las limitaciones operativas y de acceso pueden conducir a un mayor deterioro de la capacidad del sistema de salud. Los riesgos para la infraestructura de salud en funcionamiento, como la principal instalación de referencia en el Hospital San Juan de Dios, pueden reducir la disponibilidad de servicios para las poblaciones afectadas por el conflicto y los choques climáticos (La FM 03/01/2025). Al mismo tiempo, las restricciones de acceso y el aislamiento geográfico probablemente agravarán las condiciones no tratadas en las comunidades rurales e indígenas, incluidos casos severos de anemia reportados en resguardos indígenas en Cumaribo (MIRE+ 10/10/2025). Esta combinación de menor disponibilidad de servicios y mayores necesidades de salud probablemente empeorará los resultados generales de salud durante el periodo de perspectiva

Tabla 4. Estadísticas de salud para Vichada, sus municipios y a nivel nacional

Indicador	Nacional	Vichada	Puerto Carreño	La Primavera	Cumaribo	Santa Rosalía
% de la población que enfrenta barreras para acceder a servicios de salud	2.9%	2.6%	7.2%	9.6%	5.4%	14.9%
% de la población sin seguro médico	6.0%	17.1%	28.3%	30.4%	44.6%	24.2%
% de nacimientos de madres de 10–19 años como porcentaje del total de nacimientos (2024)	15.0%	24.4%	23.1%	25.6%	24.9%	26.8%

Fuente: ACAPS con datos de DANE (22/04/2025 b, 22/04/2025 b, 31/01/2020, y 06/02/2026)

Nota: el indicador ‘población que enfrenta barreras para acceder a los servicios de salud’ se refiere a casos en los que una persona pertenece a un hogar donde al menos un miembro reportó un problema de salud dentro de los 30 días anteriores a la encuesta que no requirió hospitalización, pero por el cual la persona no visitó a un médico o centro de salud (DANE 22/04/2025 c).

POBLACIONES EN ALTO RIESGO

Un alto porcentaje de la población de Vichada vive en áreas rurales (80,6%) y pertenece a comunidades indígenas (69,5%), lo que implica una alta tasa de aislamiento geográfico y dependencia de la subsistencia. Cumaribo es un foco principal, con 96,6% de habitantes rurales y 89,3% indígenas que enfrentan un riesgo extremo. La concentración de más de 10.000 migrantes y refugiados en Puerto Carreño tensiona la infraestructura urbana y la prestación de servicios.

Tabla 5. Estadísticas demográficas para Vichada, sus municipios y a nivel nacional

Ubicación	Población total (proyección 2026)	Población migrante y refugiada	% rural	% indígena
Nacional	53,399,171	2,845,187	24.1%	4.8%
Vichada	154,190	11,271	80.6%	69.5%
Puerto Carreño	24,697	10,662	24.6%	27.2%
La Primavera	10,694	376	40.1%	19.9%
Cumaribo	114,650	164	96.6%	89.3%
Santa Rosalía	4,149	69	38.8%	25.4%

Fuente: ACAPS con datos de Migración Colombia (consultado 10/03/2026); DANE (18/07/2025 y 30/07/2025); DANE (consultado 09/03/2026)

Comunidades indígenas

Las comunidades indígenas en Vichada enfrentan la mayor convergencia de riesgos humanitarios del departamento, con necesidades de protección, nutrición, salud, WASH y medios de vida que probablemente se deteriorarán entre mayo y agosto de 2026 a medida que las dinámicas del conflicto, las economías ilegales y las amenazas climáticas se intensifican en sus territorios. Estos riesgos se ven agravados por el confinamiento y la inseguridad alimentaria en resguardos geográficamente aislados que enfrentan marginación estructural.

La Defensoría del Pueblo identifica a las comunidades indígenas de los cuatro municipios entre las más expuestas a la violencia armada, el confinamiento, el desplazamiento y las restricciones a la movilidad, con riesgos particularmente agudos en áreas fronterizas y ribereñas caracterizadas por una débil presencia estatal, incluyendo La Mayera, Selva de Matavén y los territorios de Cubeo, Curripaco, Piapoco y Piaroa (DP 28/10/2025; El Morichal 06/11/2025). En 2025, aproximadamente 700 personas indígenas que viven en más de 30 asentamientos en Puerto Carreño carecían de medidas efectivas para garantizar condiciones de vida adecuadas y proteger sus derechos fundamentales (Senado 29/05/2025).

La minería ilegal de coltán que financia a los GANE se ha expandido hacia los resguardos indígenas sin consulta previa, impulsando coerción, explotación laboral, contaminación ambiental y la erosión de la gobernanza tradicional entre las comunidades Curripaco, Puinave y Sikuaní (GFI/CEALDES 18/12/2025). Las alternativas limitadas de medios de vida y la presión de los GANE también fuerzan a las comunidades a involucrarse en actividades extractivas, contribuyendo al desplazamiento y al confinamiento, mientras refuerzan los ciclos de violencia vinculados al control de los recursos naturales (GFI/CEALDES 18/12/2025).

Las privaciones estructurales agravan el impacto de las dinámicas de los GANE sobre las comunidades indígenas. En octubre de 2025, la Corte Constitucional ordenó medidas estructurales para proteger los derechos a la vida, alimentación, agua y salud de los NNA indígenas en siete comunidades en Vichada, evidenciando la severidad de las brechas preexistentes (DP 31/10/2025). Los medios de vida y los sistemas alimentarios estrechamente vinculados a la tierra incrementan la vulnerabilidad a las restricciones de acceso impuestas por los GANE, afectando directamente la disponibilidad de alimentos y los ingresos. Al mismo tiempo,

las barreras lingüísticas limitan el acceso a información, servicios, asistencia humanitaria y apoyo institucional, incrementando la exposición a la coerción y reduciendo el acceso a los mecanismos de protección (EIC 24/02/2026 d).

Migrantes y refugiados

Los migrantes y refugiados, particularmente venezolanos y comunidades indígenas que se movilizan constantemente a través de la frontera, enfrentan mayores riesgos humanitarios como resultado de vulnerabilidades superpuestas de tipo legal, económico y de protección. Para agosto de 2023, Vichada albergaba 11.445 personas de nacionalidad venezolana, el 95% de las cuales se concentraba en Puerto Carreño (Min Salud 31/01/2024). Aunque el 80,4% de los migrantes y refugiados habían iniciado el proceso del Permiso por Protección Temporal (PPT), las barreras persistentes a la regularización limitan el acceso al empleo formal, la atención en salud, la educación y los servicios de protección, incrementando la dependencia de medios de vida informales y precarios y la exposición a la explotación (Min Salud 31/01/2024).

La inestabilidad transfronteriza probablemente agravará aún más estas vulnerabilidades en 2026. Las luchas por el control territorial de los GANE, la violencia en Venezuela o los cambios en la gobernanza fronteriza pueden desencadenar movimientos no registrados o de emergencia hacia municipios con limitada capacidad de absorción. Es probable que estos movimientos aumenten la presión sobre los servicios de WASH y atención en salud ya sobrecargados, contribuyan al hacinamiento en asentamientos informales e incrementen los riesgos de desplazamiento secundario, explotación y acceso limitado a la asistencia. En este contexto, los migrantes y refugiados probablemente enfrentarán mayores barreras para acceder a la protección, los medios de vida y los servicios esenciales durante el periodo de mayo a agosto (DP 28/10/2025).

Niños, niñas y adolescentes

Los NNA en Vichada probablemente enfrentarán mayores riesgos humanitarios y de protección, a medida que los factores climáticos y la actividad de los GANE interactúen con la limitada capacidad institucional. Dicha capacidad ya restringe la respuesta a las crecientes necesidades, ya que los servicios de atención prioritaria de la niñez y maternos alcanzaron solo un 20,1% de cumplimiento en 2025, el más bajo entre las oficinas regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que indica una capacidad reducida para responder a las crecientes necesidades (ICBF 28/11/2025).

Los riesgos superpuestos a los que se enfrentará esta población incluyen inseguridad alimentaria y malnutrición, acceso reducido a servicios básicos y educación. El reclutamiento y uso de NNA forman parte de las estrategias de control social de los GANE y es probable que aumenten a medida que más grupos intenten expandirse hacia Vichada. Los NNA indígenas, rurales, migrantes y refugiados en municipios de alto riesgo como Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía probablemente requerirán mayores medidas de protección (DP 28/10/2025).

Los NNA, particularmente de las comunidades indígenas, ya enfrentan privaciones significativas en alimentación, agua segura, salud y condiciones de vida, incrementando su vulnerabilidad a los impactos humanitarios acumulativos como la desnutrición y las enfermedades (DP 31/10/2025). Los NNA sin registro civil enfrentan una exposición adicional, ya que la falta de identificación formal limita el acceso a la protección institucional (EIC 24/02/2026 d).

Es probable que estos riesgos se intensifiquen entre mayo y agosto de 2026. El aumento de la actividad de los GANE, las tensiones electorales y las restricciones de acceso relacionadas con el clima pueden interrumpir aún más la educación y la prestación de servicios, mientras incrementan la exposición de los NNA al reclutamiento, la explotación y la angustia psicosocial. Estos efectos serían más severos en áreas rurales y fronterizas, donde la presencia institucional permanece limitada y el acceso a los servicios ya está restringido (El País 23/02/2026).

Otras poblaciones en riesgo

Las comunidades rurales, ribereñas y las mujeres también están expuestas como resultado de dinámicas específicas observadas en todo Vichada, particularmente el control de los GANE sobre corredores estratégicos en los ríos Guaviare, Meta y Orinoco, restringiendo la movilidad y el acceso a los mercados y servicios (Indepaz 08/2025; CINEP 19/09/2025). Las comunidades rurales en áreas dispersas, principalmente en municipios como Cumaribo y zonas ribereñas, enfrentan mayor aislamiento, limitando el acceso a los medios de vida, atención en salud y alimentos, particularmente durante las inundaciones e incendios forestales (Min Salud 31/01/2024).

Las personas cuyos medios de vida dependen del transporte, la agricultura a pequeña escala, la ganadería o las actividades extractivas se encuentran en mayor riesgo de extorsión y coerción en áreas vinculadas a rutas estratégicas y economías ilegales, reduciendo la estabilidad de los ingresos e incrementando la dependencia de las economías ilegales (DP 28/10/2025; Indepaz 08/2025; CINEP 19/09/2025).

Las mujeres enfrentan riesgos adicionales, ya que el control territorial y la limitada presencia institucional restringen el acceso a servicios de salud y protección mientras incrementa la exposición a la VBG, principalmente vinculada a los confinamientos y desplazamientos (DP 04/12/2025). Es probable que estos riesgos se intensifiquen entre mayo y agosto de 2026 como resultado de las dinámicas de conflicto y las restricciones de acceso relacionadas con el clima.